

Publicado: 18.05.2015 13:37 | Actualizado: 19.05.2015 07:37

La Oficina Europea de Patentes viola los derechos laborales, según los trabajadores

El presidente de la organización ha impuesto una ley que afecta de lleno a la salud de los empleados, sus pensiones y sus derechos laborales como el derecho a huelga, según fuentes sindicales.



La sede de la Oficina Europea de Patentes en Múnich. GOOGLE STREET VIEW

CAROLINA GARCÍA MUNDI

MÁS INFORMACIÓN

- "Las patentes deben beneficiar a las personas, no a las empresas"
- La UE quiere rebajar el coste de las patentes
- ¿Necesitamos las patentes?

MADRID.- La Oficina Europea de Patentes (EPO por sus siglas en inglés) está viviendo en primera persona los problemas de sus trabajadores. El presidente de la organización desde el año 2010 y además presidente del Consejo de Administración de la EPO, Benoît Battistelli, "está gestionando la oficina de una manera autoritaria y antisocial que está generando problemas en la oficina". Así se han expresado fuentes de SUEPO, el sindicato de la Oficina Europea de Patentes (Unión personal de la EPO), en declaraciones a *Público*.

La EPO, con sede en Múnich y tres subseces en La Haya, Berlín y Viena, cuenta con 7.000 empleados de los cuales, 480 son de nacionalidad española. Los trabajadores aseguran que las medidas que está llevando a cabo Battistelli les afectan de lleno. "No solo hace las reglas sobre patentes, también sobre pensiones, sobre la salud, sobre los derechos laborales". El presidente de la EPO -que se encarga de validar los inventos y patentarlos y del Consejo de Administración -formado por 38 miembros que representan a los 38 países que conforman la Oficina Europea de Marcas y Patentes y que es responsable del régimen de personal y de definir el reglamento financiero-, lleva la voz cantante, es él quien tiene la última palabra, él es el **legislador**.

En 2014, Benoît Battistelli puso en marcha una ley que perjudica a los derechos sindicales, laborales y médicos de los empleados. Por su parte, los derechos laborales se están viendo vulnerados. "Él es quien decide o no si se hace huelga y decide durante cuánto tiempo". "Hay una represión muy fuerte", aseguran fuentes del sindicato.

También **pueden ser investigados** en el caso de que alguien presente una denuncia anónima contra ellos. Les avisan de que van a ser investigados -incluso su correo electrónico personal- pero no pueden contarlo. "Puedes decirselo únicamente a tu mujer y a tu médico".

Sin embargo, uno de los portavoces del sindicato cree que esta investigación que inician solo es una excusa porque forma parte del sindicato, que presiona al Consejo de Administración y a Battistelli.

Los derechos fundamentales de los trabajadores están siendo violados, sobre todo los de la salud. Battistelli toma decisiones pseudomédicas y "dispara contra los enfermos", aseguran los miembros sindicales. "El médico, propuesto por el presidente, **decide si una persona está o no inválida** -teniendo hasta tres opiniones de tres médicos diferentes-; si una persona se pone enferma tiene que llevar al tercer día un certificado y pueden hacerte inspecciones en tu propia casa si estás enfermo", añaden.

Además los datos médicos de cada trabajador están almacenados en una base de datos que los trabajadores no saben por quién está siendo controlada. La confidencialidad de los datos médicos es un derecho y un deber. En España si éste se ve mermado, puede ser un delito.

Las **pensiones** también se están viendo en peligro. El 30% del sueldo de cada empleado va a parar a un fondo de ahorros cada mes. Sin embargo, cuentan que si te vas del estado en el que trabajas esa pensión puede verse reducida. "Si me voy del estado donde resido, infrinjo una norma y me imponen una sanción. Por ejemplo, si un español tuviese una enfermedad terminal no puede volver a España hasta los 55 años. **Si te vas te pueden castigar y pueden cortarte la pensión**".

El sindicato de la EPO también está sufriendo un atentado: miembros sindicales están viendo cómo sus correos electrónicos son bloqueados desde dentro y desde fuera de la empresa. No pueden comunicarse entre sí. No pueden denunciar porque si lo hacen bajo su propio nombre, recibirán un procedimiento disciplinario. Esta situación en la que la intimidad se ve violada, en España sería un delito penal, tal y como confirma un abogado (responsable del caso de los trabajadores de la EPO).

Esta vulneración contra los derechos fundamentales de los trabajadores ya ha llegado a los tribunales. Fuentes del sindicato SUEPO afirman que fueron al **tribunal holandés de segunda estancia y la sentencia del juez les dio la razón**, diciendo que Battistelli tenía que derogar esa ley, permitiendo que entre miembros sindicales pudieran seguir mandándose e-mails, además tendría que negociar con el sindicato.

Sin embargo, la decisión del juez no ha servido para nada. Battistelli mandó un comunicado a todos los trabajadores para anunciarles que **no iba a cumplir sentencia** porque "es peligroso para la oficina que haya estas iniciativas que están apoyadas por el sindicato, cuyo primer interés debería ser defender los intereses del personal. Por tanto podéis contar con mi perseverancia y compromiso para defender nuestra organización". Fuentes del sindicato aseguran que este comunicado "es un ejercicio de propaganda y un ataque contra la inmunidad".

La **inmunidad** la tienen todas las organizaciones internacionales. Esta implica que la propia organización es independiente y no depende de las leyes del país en el que reside. Sin embargo, esta característica otorga un gran poder que puede acabar en un abuso. "Están usando la inmunidad para cambiar las leyes laborales, las leyes sindicales, la ley de sanidad, los derechos y libertades fundamentales. Es un **abuso** de la inmunidad", sentencian fuentes del sindicato.

"El Parlamento Europeo esquivo el tema"

Sepuo, el sindicato de la Organización Europea de Patentes y Marcas, ha contactado con diferentes parlamentos: el de Holanda, Luxemburgo y el Parlamento Europeo.

Lo hacen de forma anónima y personal, pidiendo de forma primordial que guarden su identidad para que no les echen de sus puestos de trabajo. Simplemente, les dejan la información que necesitan, los parlamentarios investigan y proponen la pregunta en la Comisión Europea. Sin embargo, **la reacción de los comisarios europeos y los políticos es pasiva**, evitan este tema porque la EPO es una organización internacional independiente. "No es de la Unión Europea y no tiene autoridad. Lo que sí tiene es autoridad política, pero no hacen nada", aseguran miembros del sindicato.

"Battistelli hace la norma, él es el juez. Lo que hace debería de estar supervisado por los Estados miembros", afirman fuentes sindicales. "Pero nadie la supervisa por el dinero y el poder. La EPO no recibe dinero de los países miembros, sino al contrario, les aporta muchos beneficios", confirman las fuentes.

"No tenemos vía judicial para las cuestiones laborales"

Todos los trabajadores, independientemente de que formen parte del sindicato o no, opinan lo mismo. "No tenemos una vía judicial para las cuestiones laborales porque el juez es el presidente". Están en una situación de indefensión porque no pueden defender sus derechos fundamentales si no se cambia la norma que puso en marcha Battistelli.

La única manera que tienen de denunciar lo que está ocurriendo es a través de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) pero con la dificultad de que no ve demandas sindicales, sino demandas individuales. "**La acción sindical está vetada**. No obliga a la EPO a cambiar la norma porque la demanda es individual y solo afecta a ese individuo", aseguran.

Por ello, han contactado con el **despacho de abogados** de Madrid para llevar el caso. "A través de una campaña mediática, del contacto con los sindicatos de CCOO y UGT para acceder a la Federación europea de sindicatos (FES), del contacto con grupos parlamentarios y con el representante del gobierno español, Patricia García Escudero; queremos reabrir la negociación e incluso abrir una vía judicial en España, a pesar de la inmunidad", concluye uno de los abogados responsables del caso.

English translation

The European Patent Office is violating labour laws, according to the employees

Trade union sources claim that the President of the organization has imposed a ruling which is having a massive effect on the health of the employees, their pensions, and their labour rights, such as the right to strike.

CAROLINA GARCÍA MUNDI

MADRID.- The European Patent Office (EPO) is encountering first-hand the problems of the employees. The President of the organization since 2010, and also President of the Administrative Council of the EPO, Benoît Battistelli, "is managing the Office in an authoritarian and antisocial manner, which is causing problems at the Office". This at least is the view expressed by sources at SUEPO, the Staff Union of the European Patent Office, in statements made to *Público*.

The EPO, with headquarters in Munich and three branch offices in The Hague, Berlin, and Vienna, has a staff of 7,000 people, 480 of them Spanish nationals. The employees insist that the measures being imposed by Battistelli are having a massive effect on them. "Not only the rules about patents, but also about pensions, health, employees' rights". The President of the EPO, which is responsible for validating inventions and the patenting of them, is also the President of the Administrative Council. The Council is formed of 38 members, representing the 38 countries which make up the European Patent and Trademark Office, and is responsible for personnel matters as well as for defining the financial structure and arrangements, and the President is making his voice very clearly heard: He is the person who has the last word; he is the **legislator**.

In 2014, Benoît Battistelli imposed a ruling which is prejudicial to the rights of the employees in matters relating to trade unions, labour relations, and medical benefits. Labour rights in particular have come under attack. "He's going to be the person who decides whether or not there's going to be a strike, and how long it can go on". "There's massive repression being imposed", sources in the trade union insist.

The staff **can also be placed under investigation** if someone utters an anonymous denunciation against them. They are told that they are going to be investigated, including the personal E-mails, but they can't do anything about it. "The only people you can talk to are your wife and your doctor".

One spokesperson for the union believes, however, that the investigation was only started because the person concerned was a significant member of the union, which was putting pressure on the Administrative Council and on Battistelli.

The basic rights of the employees are being violated, in particular with regard to their health. Battistelli is taking pseudo-medical decisions and "targeting people who are ill", union members maintain. And there's more: "The doctor, appointed by the President, **decides whether a person is ill or not**, while up to now three opinions were sought from three different doctors. If a person reports sick, they have to produce a certificate on the third day, and you can be subjected to examinations in your own home if you're ill".

As well as this, the medical records of each employee are stored on a database, and the staff have no idea who controls it. Confidentiality of medical records is a right and an obligation. In Spain, if confidentiality is breached, it may be treated as a criminal offence.

Pensions are also coming under attack. 30% of the salary of each employee is put into a savings fund every month. However, if you come from the State in which you are working, this pension can be reduced. "If I go to the State where I'm living, I'm breaking a rule and they penalize me. For example, if a Spanish national contracts a terminal illness, he can't go back to Spain until he's 55. **If you do go, they can take disciplinary action and cut the pension**".

The EPO union has also come under fire. Union members have been having their E-mails blocked, from within the Office and outside. They cannot communicate with one another. They cannot complain, because if they do so under their real name they lay themselves open to disciplinary procedures. This situation, in which privacy is being violated, would constitute a criminal offence in Spain, as a lawyer confirmed (responsible for the case of the EPO personnel).

This breach of basic rights of the staff has already been brought before the courts. Sources from the SUEPO union confirm that **the ruling by the Dutch court of second instance was in their favour**, requiring Battistelli to revoke this ruling and to allow union members to continue sending E-mails, as well as obliging him to begin negotiating with the union.

But the decision by the court got nowhere. Battistelli issued a memo to all the staff to inform them that **he was not going to abide by the ruling**, because "it is dangerous for the Office for these initiatives to be taken, which are supported by the union, the primary concern of which should be to defend the interests of the personnel. You can nevertheless count on my perseverance and commitment to defending our organization". Sources from the union maintain that this memo "is a propaganda exercise and an attack on immunity".

Immunity is something which all the international organizations have. The implication is that the individual organization itself is independent and is not subject to the laws of the country in which it is based. This characteristic, however, comes to create great power, which can then degenerate into abuse. "They are using this immunity to change the rules about labour relations, about the unions, about health, and about basic rights and liberties. This is an **abuse** of immunity", is how union sources condemn the action.

"The European Parliament is dodging the issue"

SUEPO, the trade union of the European Patent and Trademark Office, has contacted a number of national parliaments: The Netherlands, Luxemburg, and the European Parliament.

This was done in an anonymous and personal way, under the essential precondition that the identity of the persons concerned be kept secret so as not to be thrown out of their jobs. They simply provided the information needed for the parliamentarians to investigate and pursue the matter with the European Commission. **The reaction by the European Commissioners and the politicians, however, has been entirely passive**, dodging the issue on the pretext that the EPO is an independent international organization. "It is not part of the European Union, and they have no authority over it. They do have political authority, but they're doing nothing", according to union members.

"Battistelli makes the rules, he's the judge and jury. He ought to be at least supervised by the Member States", union sources insist. "But nothing is supervised, not the money or the power. The EPO does not receive money from the Member States; on the contrary, they reap a lot of benefit from it", as the sources confirm.

"We have no legal recourse when it comes to labour relations"

All the employees, regardless of whether they are part of the union or not, take the same view. "We don't have any legal recourse for labour issues, because the judge is the President". They are in an indefensible situation; they cannot defend their fundamental rights if they cannot change the rules, and Battistelli makes the rules.

The only way they can exert any pressure is by way of the International Labour Organization (ILO), but with the difficulty that they cannot pursue claims as a union, but only as individuals. **Action by a union is vetoed**. The EPO is not obliged to change the rules because the claim has to be from an individual, and only affecting that individual", they maintain.

A **law firm** in Madrid has been contacted to pursue the issue. "By way of a media campaign, contact with the CCOO and UGT unions so as to access to the European Trade Union Confederation, contact with parliamentary groups, and with the representative of the Spanish Government, Patricia García Escudero, we are aiming to reopen negotiations, as well as pursuing legal recourse in Spain, despite the immunity", is the view taken by one of the attorneys handling the case.

Traduction française

L'Office européen des brevets viole les droits du travail, selon les employés

Le président de l'organisation a imposé une loi qui porte atteinte à la santé des employés, à leurs retraites et à leurs droits du travail, notamment leur droit à la grève, selon des sources syndicales.

CAROLINA GARCÍA MUNDI

MADRID - L'Office européen des brevets (OEB) vit de première main les problèmes de ses employés. Son président depuis 2010, Benoît Battistelli, qui préside par ailleurs le Conseil d'administration de l'Office, « dirige l'organisation d'une manière autoritaire et antisociale qui engendre des problèmes au sein de l'Office ». Ainsi se sont exprimées des sources du SUEPO, le syndicat de l'Office européen des brevets (Union syndicale de l'Office européen des brevets), dans des déclarations au quotidien espagnol *Público*.

L'OEB, qui a son siège à Munich et trois bureaux situés à La Haye, Berlin et Vienne, emploie 7 000 personnes, dont 480 employés de nationalité espagnole. Les employés assurent que les mesures mises en œuvre par Battistelli les touchent de plein fouet. « Il dicte non seulement les règles sur les brevets, mais également sur les retraites, sur la santé et sur les droits du travail ». Le président de l'OEB - qui se charge de valider les inventions et de les breveter et du Conseil d'administration, auquel siègent 38 membres représentant les 38 pays composant l'Office européen des brevets et qui est responsable du régime du personnel et de la définition du règlement financier - tire les ficelles, c'est lui qui a le dernier mot, c'est le **législateur**.

En 2014, Battistelli a mis en marche une loi qui porte atteinte aux droits syndicaux, du travail et médicaux des employés. Les droits du travail, notamment, sont violés. « C'est lui qui décide si l'on fait grève ou non, et pendant combien de temps ». « Il existe une répression très forte », assurent des sources du syndicat.

Ils **peuvent également faire l'objet d'une enquête** si quelqu'un les dénonce sous couvert d'anonymat. On les prévient de ce qu'ils vont faire l'objet d'une enquête - qui examinera même leur courrier électronique personnel - mais ils ne peuvent pas en parler. « On peut en parler uniquement à sa femme et à son médecin ».

Cependant, un des porte-parole du syndicat estime que cette enquête lancée n'est qu'une excuse, parce qu'il fait partie du syndicat, qui fait pression sur le Conseil d'administration et sur Battistelli.

Les droits fondamentaux des travailleurs sont violés, en particulier ceux qui ont trait à la santé. Battistelli prend des décisions pseudomédicales et « tire sur les malades », assurent les membres syndicaux. « Le médecin, proposé par le président, **décide si quelqu'un est invalide ou non** - ayant jusqu'à trois options de médecins différents - si quelqu'un tombe malade, il doit fournir un certificat le troisième jour, et on peut venir vous inspecter chez vous si vous êtes malade », ajoutent-ils.

Par ailleurs, les données médicales de chaque employé sont stockées dans une base de données dont les travailleurs ne savent pas par qui elle est contrôlée. La confidentialité des données médicales est un droit et un devoir. En Espagne, si ce droit est remis en cause, cela peut constituer un délit.

Les **retraites** sont également mises en danger. Trente pour cent du salaire de chaque employé est affecté chaque mois à un fonds d'épargne. Toutefois, expliquent-ils, si vous quittez l'État dans lequel vous travaillez, cette pension peut être réduite. « Si je quitte l'État où je réside, j'enfreins une norme et ils m'imposent une sanction. Par exemple, si un Espagnol est atteint d'une maladie terminale, il ne peut pas rentrer en Espagne avant l'âge de 55 ans. **Si vous partez, ils peuvent vous punir et vous couper la pension** ».

Le syndicat de l'OEB est également attaqué : des membres syndicaux assistent au blocage de leurs courriers électroniques depuis l'intérieur et l'extérieur de l'entreprise. Ils ne peuvent pas communiquer entre

eux. Ils ne peuvent pas introduire de plainte, parce que s'ils le font en leur propre nom, ils font l'objet d'une procédure disciplinaire. Cette situation, dans laquelle l'intimité est violée, constituerait un délit pénal en Espagne, comme le confirme un avocat (responsable de l'affaire des employés de l'OEB).

Cette atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs a été portée devant les tribunaux. Des sources du syndicat SUEPO affirment qu'ils ont introduit une procédure devant la **Cour d'appel des Pays-Bas, qui leur a donné raison**, en déclarant que Battistelli devait abroger cette loi et permettre que les membres syndicaux puissent continuer de s'envoyer des courriers électroniques entre eux, et qu'il devrait en outre négocier avec le syndicat.

Cependant, la décision du juge n'a servi à rien. Battistelli a envoyé un communiqué à tous les employés pour leur annoncer qu'il **ne respecterait pas le jugement** parce qu'il est « dangereux pour l'Office qu'il y ait de telles initiatives appuyées par le syndicat, dont la première préoccupation devrait être de défendre les intérêts du personnel. Vous pouvez donc compter sur ma persévérance et sur mon engagement pour défendre notre organisation ». Des sources du syndicat assurent que ce communiqué « est un exercice de propagande et une attaque contre l'immunité ».

L'**immunité**, toutes les organisations internationales en bénéficient. Cela signifie que l'organisation elle-même est indépendante et ne dépend pas des lois du pays où elle est installée. Néanmoins, cette caractéristique octroie un grand pouvoir, qui peut tourner à l'abus. « Ils se servent de l'immunité pour changer les lois sur le travail, les lois syndicales, la loi sur la santé, les droits et les libertés fondamentaux. Cela constitue un **abus** de l'immunité », concluent les sources du syndicat.

« Le Parlement européen esquive la question »

Suepo, le syndicat de l'Office européen des brevets, a contacté différents parlements : celui des Pays-Bas, celui du Luxembourg et le Parlement européen.

Ils le font de façon anonyme et personnelle, en demandant qu'on préserve par-dessus tout leur identité afin qu'ils ne soient pas licenciés. Ils se contentent de leur fournir l'information dont ils ont besoin, les parlementaires enquêtent et proposent la question à la Commission européenne. Cependant, **la réaction des commissaires européens et des politiciens est passive**, ils évitent la question parce que l'OEB est une organisation internationale indépendante. « Il ne relève pas de l'Union européenne et celle-ci n'a pas d'autorité. Ce qu'elle a, en revanche, c'est une autorité politique, mais ils ne font rien », assurent des membres du syndicat.

« Battistelli dicte les normes, c'est le juge. Ce qu'il fait devrait être supervisé par les États membres », affirment des sources syndicales. « Mais personne ne supervise l'Office, à cause de l'argent et du pouvoir. L'OEB ne reçoit pas d'argent des pays membres, bien au contraire, il leur apporte beaucoup de bénéfices », confirment les sources.

« Nous n'avons pas de voie judiciaire pour les questions liées au travail »

Tous les employés, syndiqués ou non, sont du même avis. « Nous n'avons pas de voie judiciaire pour les questions liées au travail, parce que le juge est le président ». Ils sont sans défense parce qu'ils ne peuvent protéger leurs droits fondamentaux si l'on ne change pas la norme que Battistelli a mise en place.

La seule manière qu'ils ont de dénoncer ce qui se passe est à travers l'Organisation internationale du Travail (OIT), mais la difficulté est que celle-ci n'étudie pas les réclamations syndicales, mais bien les réclamations individuelles. « **L'action syndicale est interdite**. Il n'oblige pas l'OEB à changer la norme, parce que la réclamation est individuelle et n'affecte que la personne concernée », assurent-ils.

C'est la raison pour laquelle ils ont fait appel au **cabinet d'avocats** madrilène pour se charger de l'affaire. « Au travers d'une campagne médiatique, du contact avec les syndicats Comisiones Obreras et UGT pour accéder à la Confédération européenne des syndicats (CES) et du contact avec des groupes parlementaires et avec le représentant du gouvernement espagnol, Patricia García Escudero, nous voulons relancer les négociations et même ouvrir une procédure judiciaire en Espagne, en dépit de l'immunité », conclut un des avocats responsables de l'affaire.

Deutsche Übersetzung

Das Europäische Patentamt verletzt nach Meinung der Mitarbeiter die Arbeitsrechte

Der Präsident der Organisation hat eine Verordnung erlassen, welche die Gesundheit der Mitarbeiter, ihre Renten und ihre Arbeitsrechte wie das Streikrecht beeinträchtigt, wie aus Gewerkschaftsquellen verlautet.

CAROLINA GARCÍA MUNDI

MADRID - Das Europäische Patentamt (EPA) erlebt am eigenen Leib die Probleme seiner Mitarbeiter. Der Präsident der Organisation seit 2010 und außerdem Präsident des EPA-Verwaltungsrats, Benoît Battistelli, "führt das Amt auf autoritäre und unsoziale Weise, die innerhalb des Amtes Probleme hervorruft". So die Aussage der IGEPA, der Gewerkschaft im Europäischen Patentamt (in Personalunion mit dem EPA) in Erklärungen gegenüber *Público*.

Das EPA mit Sitz in München und drei Niederlassungen in Den Haag, Berlin und Wien hat 7.000 Beschäftigte, von denen 480 spanischer Nationalität sind. Die Mitarbeiter versichern, dass die von Battistelli eingeleiteten Maßnahmen sie in vollem Umfang treffen. "Er macht nicht nur die Regeln in Bezug auf Patente, sondern auch in Bezug auf Renten, Gesundheit, Arbeitsrechte." Der Präsident des EPA – das sich um die Validierung der Erfindungen und deren Patentierung kümmert – und des Verwaltungsrats –, bestehend aus 38 Mitgliedern, die die 38 Länder vertreten, welche das Europäische Marken- und Patentamt bilden, und der für die Personalverwaltung und die Festlegung der Finanzordnung verantwortlich ist, gibt den Ton an, er ist derjenige, der das letzte Wort hat, er ist der **Gesetzgeber**.

Im Jahr 2014 brachte Benoît Battistelli eine Verordnung auf den Weg, welche die Gewerkschaftsrechte, Arbeitsrechte und medizinischen Rechte der Mitarbeiter beeinträchtigt. Auf seiner Seite werden die Arbeitsrechte verletzt. "Er ist es, der entscheidet, ob gestreikt wird oder nicht, und für wie lange." "Es existiert eine äußerst starke Repression", versichern Gewerkschaftsquellen.

Die Mitarbeiter **können auch einer Untersuchung unterzogen werden**, falls einer von ihnen anonym denunziert wird. Ihnen wird mitgeteilt, dass eine Untersuchung gegen sie stattfinden wird – einschließlich der persönlichen E-Mails –, jedoch können sie darüber nicht berichten. "Man kann es nur seiner Frau und seinem Arzt erzählen."

Einer der Gewerkschaftssprecher glaubt jedoch, dass diese eingeleitete Untersuchung nur ein Vorwand ist, weil jemand Mitglied der Gewerkschaft ist, die den Verwaltungsrat und Battistelli unter Druck setzt.

Die Grundrechte der Mitarbeiter werden verletzt, insbesondere das Recht auf Gesundheit. Battistelli trifft pseudomedizinische Entscheidungen und "schießt auf die Kranken", versichern die Gewerkschaftsmitglieder. "Der vom Präsidenten vorgeschlagene Arzt **entscheidet, ob jemand arbeitsunfähig ist oder nicht** – wobei drei verschiedene Ärzte bis zu drei unterschiedliche Meinungen äußern; wenn jemand erkrankt, muss er bis zum dritten Tag ein Attest beibringen und bei ihm zu Hause können Kontrollen daraufhin stattfinden, ob er tatsächlich krank ist", fügen sie hinzu.

Darüber hinaus werden die medizinischen Daten jedes Mitarbeiters in einer Datenbank gespeichert, von der die Mitarbeiter nicht wissen, wer sie kontrolliert. Die vertrauliche Behandlung der medizinischen Daten ist ein Recht und eine Pflicht. Wenn diese Geheimhaltungspflicht in Spanien verletzt wird, kann dies eine Straftat sein.

Auch die **Renten** sind gefährdet. 30% des Gehalts jedes Mitarbeiters fließen jeden Monat in einen Sparfonds. Sie berichten jedoch, dass diese Rente reduziert werden kann, wenn jemand den Staat verlässt, in dem er arbeitet. "Wenn ich in den Staat gehe, in dem ich meinen Wohnsitz habe, verletze ich eine Norm und ich werde bestraft. Sollte ein Spanier zum Beispiel eine tödliche Krankheit haben, kann er bis zum 55. Lebensjahr nicht nach Spanien zurückkehren. **Geht er doch, kann er bestraft und seine Rente kann gekürzt werden.**"

Die Gewerkschaft des EPA wird ebenfalls attackiert: Gewerkschaftsmitglieder beobachten, wie ihre E-Mails von innerhalb und außerhalb des Unternehmens blockiert werden. Sie können nicht miteinander kommunizieren. Sie können keine Anzeige erstatten, denn wenn sie es im eigenen Namen tun, erhalten sie ein Disziplinarverfahren. Diese Situation, in der die Privatsphäre verletzt wird, wäre in Spanien eine Straftat, wie ein Anwalt bestätigt (der für den Fall der EPA-Mitarbeiter zuständig ist).

Diese Verletzung der Grundrechte der Mitarbeiter wurde bereits den Gerichten unterbreitet. Quellen der Gewerkschaft IGEPa bestätigen, dass bereits das **niederländische Gericht zweiter Instanz angerufen wurde und das richterliche Urteil ihnen Recht gegeben habe**, worin gesagt wird, Battistelli müsse diese Verordnung außer Kraft setzen und es zulassen, dass zwischen Gewerkschaftsmitgliedern weiterhin E-Mails ausgetauscht werden könnten, und im Übrigen habe er mit der Gewerkschaft zu verhandeln.

Die Entscheidung des Richters hat jedoch nichts gebracht. Battistelli ließ den Mitarbeitern eine Verlautbarung zugehen und teilte mit, er werde **dem Urteil nicht Folge leisten**, da es "für das Amt gefährlich ist, dass es diese von der Gewerkschaft unterstützten Initiativen gibt, deren Hauptinteresse darin bestehen sollte, die Interessen des Personals zu verteidigen. Deshalb könnt ihr auf meine Beharrlichkeit und meine Verpflichtung, unsere Organisation zu verteidigen, zählen." Gewerkschaftsquellen versichern, dass diese Verlautbarung "ein Propaganda-Akt und ein Angriff auf die Immunität ist."

Alle internationalen Organisationen genießen **Immunität**. Dies bedeutet, dass die eigene Organisation unabhängig ist und nicht von den Gesetzen des Landes, in dem sie ihren Sitz hat, abhängt. Dieses Merkmal bringt jedoch große Macht mit sich, die letztendlich missbraucht werden kann. "Die Immunität wird benutzt, um die Arbeitsgesetze, die Gewerkschaftsgesetze, das Gesundheitsgesetz, die Grundrechte und -freiheiten zu verändern. Es ist ein **Missbrauch** der Immunität", urteilen Gewerkschaftsquellen.

"Das Europäische Parlament vermeidet das Thema"

Die IGEPa, die Gewerkschaft der Europäischen Patent- und Markenorganisation, hat verschiedene Parlamente kontaktiert: die Parlamente der Niederlande, Luxemburgs und das Europäische Parlament.

Dies geschieht anonym und persönlich und es wird vorrangig darum gebeten, ihre Identität zu schützen, damit niemand seinen Arbeitsplatz verliert. Sie überlassen den Parlamenten einfach die Informationen, die sie benötigen, die Parlamentarier stellen eine Untersuchung an und legen die Frage der Europäischen Kommission vor. **Die Reaktion der Europakommissare und der Politiker ist jedoch passiv**; sie meiden dieses Thema, da das EPA eine unabhängige internationale Organisation ist. "Sie gehört nicht zur Europäischen Union und hat keine Machtbefugnis. Was sie allerdings hat, ist politische Autorität, aber es wird nichts unternommen", versichern Mitglieder der Gewerkschaft.

"Battistelli setzt die Norm, er ist der Richter. Seine Handlungsweise müsste von den Mitgliedsstaaten überwacht werden", bekräftigen Gewerkschaftsquellen. "Aber wegen des Geldes und der Macht findet keine Überwachung statt. Das EPA erhält von den Mitgliedsländern kein Geld, ganz im Gegenteil, es bringt ihnen viele Vorteile", bestätigen die Quellen.

"Es gibt keinen Rechtsweg für die arbeitsrechtlichen Fragen"

Alle Mitarbeiter, ganz gleich, ob sie Gewerkschaftsmitglieder sind oder nicht, vertreten die gleiche Meinung. "Uns steht kein Rechtsweg für die arbeitsrechtlichen Fragen offen, weil der Präsident der Richter ist." Sie befinden sich in einer Situation der Wehrlosigkeit, weil sie ihre Grundrechte nicht verteidigen können, wenn nicht die von Battistelli eingeführte Norm geändert wird.

Die einzige Art und Weise, bekanntzumachen, was geschieht, ist über die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), was jedoch die Schwierigkeit mit sich bringt, dass es sich nicht um Gewerkschaftsanträge, sondern individuelle Anträge handelt. **Gegen gewerkschaftliches Vorgehen wird ein Veto eingelegt**. Das EPA wird nicht verpflichtet, die Norm zu ändern, da es sich um einen Einzelantrag handelt und davon nur dieser Einzelne betroffen ist", versichern sie.

Daher haben sie sich an eine **Anwaltskanzlei** in Madrid gewandt mit der Bitte, den Fall zu übernehmen. "Mithilfe einer Medienkampagne, des Kontakts mit den Gewerkschaften CCOO und UGT für den Zugang zum Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB), des Kontakts mit parlamentarischen Gruppen und mit der Vertreterin der spanischen Regierung, Patricia García Escudero, möchten wir die Verhandlung wieder aufnehmen und auch einen Rechtsweg in Spanien eröffnen, ungeachtet der Immunität", schließt einer der für den Fall zuständigen Anwälte.

Nederlandse vertaling

Het Europees Octrooibureau schendt de arbeidsrechten, aldus de werknemers

De president van de organisatie heeft een wet opgelegd die een grote weerslag heeft op de gezondheidsrechten van de werknemers, hun pensioen en hun arbeidsrechten, zoals het stakingsrecht, aldus vakbondsbronnen.

CAROLINA GARCÍA MUNDI

MADRID.- Het Europees Octrooibureau (in het Engels EPO) ondervindt aan den lijve de problemen van zijn werknemers. Benoît Battistelli, president van de organisatie sinds 2010 en daarnaast voorzitter van de Raad van Bestuur van het EPO, "leidt het bedrijf op een autoritaire en antisociale wijze die problemen veroorzaakt op de werkvloer." Aldus bronnen van SUEPO, de persoonlijke vakbond van het Europees Octrooibureau, in verklaringen aan *Público*.

Het EPO, dat in München zetelt en drie bijkantoren heeft, in Den Haag, Berlijn en Wenen, heeft 7.000 mensen in dienst, waarvan 480 met de Spaanse nationaliteit. De werknemers stellen dat ze de dupe zijn van de door Battistelli ingevoerde maatregelen. "Hij bedenkt niet alleen regels voor octrooien, maar ook voor pensioenen, gezondheidsrechten en arbeidsrechten." De president van het EPO deelt de lakens uit en heeft altijd het laatste woord, hij is de **wetgever**. Hij is belast met de validatie van de uitvindingen en de verlening van octrooien, alsmede met de Raad van Bestuur. Deze bestaat uit 38 leden die de 38 landen vertegenwoordigen die het Merkenbureau vormen en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en het vaststellen van het financiële reglement.

In 2014 voerde Benoît Battistelli een wet in die de vakbondsrechten, de arbeidsrechten en de gezondheidsrechten van de werknemers schaadt. De arbeidsrechten worden geschonden. "Hij beslist of er gestaakt wordt of niet, en hoe lang er gestaakt wordt." "Er is sprake van een zeer sterke repressie," aldus vakbondsbronnen.

Daarnaast **kan een onderzoek naar de werknemers worden ingesteld** indien iemand een anonieme klacht tegen de organisatie indient. De werknemers worden gewaarschuwd dat er een onderzoek naar hen zal worden ingesteld, zelfs naar hun privé e-mail, maar mogen hier met niemand over praten. "Je mag het alleen aan je vrouw en je huisarts vertellen."

Een van de woordvoerders van de vakbond denkt echter dat dit onderzoek alleen als smoesje dient, omdat hij lid is van de vakbond, die de Raad van Bestuur en Battistelli onder druk zet.

De grondrechten van de werknemers worden met voeten getreden, met name de gezondheidsrechten. Battistelli neemt pseudomedische beslissingen en "en schiet op de zieke werknemers", aldus de vakbondsleden. "De arts, die door de president is voorgedragen, **beslist of iemand wel of niet arbeidsongeschikt is**, waarbij hij over het oordeel beschikt van drie verschillende artsen; als iemand ziek wordt, moet hij op de derde dag een verklaring overleggen en kunnen ze bij die persoon op huisbezoek komen om na te gaan of hij wel ziek is", voegen ze daaraan toe.

De medische gegevens van alle werknemers worden bovendien in een gegevensbestand bewaard waarvan de werknemers niet weten door wie het wordt beheerd. De vertrouwelijkheid van de medische gegevens is een recht en een plicht. Indien dit recht aan iemand wordt onttrokken, kan dit feit in Spanje als een misdrijf worden aangemerkt.

Ook de **pensioenen** lopen gevaar. Maandelijks gaat 30% van het salaris van elke werknemer naar een spaarfonds. Er wordt echter gezegd dat indien een werknemer vertrekt uit het land waar hij werkt, dit een verlaging van zijn pensioen met zich mee kan brengen. "Als ik het land waar ik mijn gewone verblijfplaats heb verlaat, schend ik een regel en wordt mij een sanctie opgelegd. Bijvoorbeeld, indien een Spaanse werknemer een terminale ziekte heeft, mag hij pas op zijn 55ste terugkeren naar Spanje. **Als hij toch vertrekt, kunnen er strafmaatregelen volgen en kan zijn pensioen worden verlaagd.**"

Ook de vakbond van het EPO zelf is doelwit van een aanslag: de vakbondsleden constateren dat hun e-mail zowel van binnenuit als van buiten het bedrijf worden geblokkeerd. Ze kunnen niet met elkaar communiceren. Ze kunnen deze situatie niet aanklaarten, omdat wanneer zij dat onder hun eigen naam doen, een disciplinaire procedure zal worden gestart. Deze schending van de intimiteit wordt in Spanje aangemerkt als een strafbaar feit, aldus de advocaat die de zaak behandelt van de werknemers van het EPO.

Deze schending van de fundamentele rechten van de werknemers is aan een rechter voorgelegd. Bronnen van de vakbond SUEPO verklaren dat zij naar een **Nederlandse Rechtbank van tweede aanleg zijn gestapt en dat zij door de rechter in het gelijk zijn gesteld in zijn vonnis**, door te beslissen dat Battistelli voornoemde wet dient te herroepen en dient toe te staan dat de vakbondsleden met elkaar per e-mail kunnen blijven communiceren, en dat hij daarnaast met de vakbond dient te onderhandelen.

De beslissing van de rechter heeft echter nergens toe geleid. Battistelli liet een communiqué uitgaan naar alle werknemers om aan te kondigen dat hij **niet van plan was om het vonnis uit te voeren** omdat "het gevaarlijk is voor het bureau dat er dit soort initiatieven bestaan die door de vakbond worden gesteund, wiens grootste belang de bescherming van de belangen van het personeel zou moeten zijn. Jullie kunnen daarom op mijn vasthoudendheid en toezegging rekenen om onze organisatie te beschermen." Vakbondsbronnen voeren aan dat dit communiqué "een propaganda-activiteit is en een aanval tegen de immuniteit".

Alle internationale organisaties genieten **immuniteit**. Deze immuniteit houdt in dat de organisatie onafhankelijk is en niet onder de wet valt van het land waarin zij zetelt. Deze omstandigheid geeft veel macht, die in misbruik kan uitmonden. "Ze gebruiken de immuniteit om de arbeidswetten, de vakbondswetten, de gezondheidswetten en de fundamentele vrijheden te wijzigen. We hebben hier te maken met een **misbruik** van de immuniteit", verklaren de vakbondsbronnen.

"Het Europees Parlement ontwijkt dit onderwerp"

SUEPO, de vakbond van het Europees Merkenbureau, heeft contact gehad met verschillende parlementen: dat van Nederland, Luxemburg en het Europees Parlement.

Dat doen zij persoonlijk en anoniem, met het dringende verzoek om hun identiteit niet prijs te geven, om ontslag te voorkomen. Ze verstrekken de benodigde informatie, de parlementariërs onderzoeken vervolgens deze informatie en formuleren de vraag in de Europese Commissie. Echter, **de Europese commissarissen en de politici hebben in deze een passieve houding aangenomen**, ze ontwijken de kwestie omdat het EPO een onafhankelijke internationale organisatie is. "Het valt niet onder de Europese Unie en die heeft geen gezag. Wel politiek gezag, maar ze doen niets," aldus de vakbondsleden.

"Battistelli stelt de normen op, hij is de rechter. De lidstaten zouden toezicht moeten houden op wat hij doet", stellen de vakbondsbronnen. "Maar niemand houdt toezicht, vanwege het geld en de macht die hiermee gemoeid zijn. Het EPO ontvangt geen geld van de lidstaten maar levert hen, integendeel, veel voordelen op," bevestigen deze bronnen.

"We kunnen niet naar de rechter stappen met arbeidsconflicten"

Alle werknemers, ongeacht of ze lid zijn van de vakbond, zijn dezelfde mening toegedaan. "We kunnen niet naar de rechter stappen met arbeidsconflicten omdat de president de rechter is." Ze kunnen zich niet verweren omdat ze niet hun grondrechten kunnen verdedigen zolang de door Battistelli ingestelde norm niet verandert.

De enige manier die zij hebben om deze situatie aan te klagen is via de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), maar deze neemt geen eisen van vakbonden in behandeling, alleen individuele eisen. **"Er rust een veto op de vakbondsactie**. De IAO verplicht het EPO niet om de norm te wijzigen, omdat het een individuele eis betreft die alleen van invloed is op het desbetreffende individu," stelt ze.

Om bovenstaande reden hebben ze een **advocatenkantoor** in Madrid in de arm genomen ter behartiging van hun zaak. "Door middel van een mediacampagne, het contact leggen met de Spaanse vakbonden CCOO en UGT om toegang te krijgen tot het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) en het contact leggen met parlementaire groepen en met de vertegenwoordiger van de Spaanse regering, Patricia García Escudero. We willen de onderhandeling heropenen en zelfs juridische stappen nemen in Spanje, ondanks de immuniteit," concludeert een van de advocaten die aan deze zaak werkt.